
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO

LA **A**GENDA

Publicación No.7 – Abril 2020

LA RACIONALIDAD FUNDAMENTALISTA

Por Carlos Morel

En una democracia, enfrentar problemas públicos requiere coordinar esfuerzos de individuos y grupos con intereses diferentes e incluso contrapuestos. Esto nos trae uno de los límites persistentes de la capacidad de coexistir en democracia, ¿cómo tomar decisiones públicas a partir de puntos de vistas divergentes?

En momentos como este, donde el mundo es azotado por un fenómeno tan destructivo como ha sido el Covid-19, y que requiere de respuestas políticas y técnicas de alto nivel, este límite pone en peligro la capacidad de cualquier Estado de responder al desastre. Es evidente que el conocimiento científico es la base para responder a las emergencias como la pandemia del Covid-19, pero no es evidente cómo evitar que la racionalidad técnica abrume a la democracia y caiga en el cientificismo (que es una forma de fundamentalismo).

En este sentido, el conocimiento que necesita una democracia para ser funcional y evitar el relativismo debe sustentarse en una racionalidad pública, que evite dos extremos del fundamentalismo.

De un lado, la imposición de un conocimiento basado en la creencia dogmática “yo creo en X, por ende X le da valor a la vida, y entonces todo debe ser medido en base a X”. Esta suele ser la forma de pensar del activismo religioso. Al entenderse que Dios es lo único que da valor a las cosas, se establece un nihilismo por lo mundano. Un ejemplo de esto es considerar que una persona se salvó del Covid-19 solo por “la oración colectiva de todo un pueblo”, poniendo por debajo toda la labor médica e incluso el privilegio mismo de tener acceso a una buena atención médica en un país como el nuestro.

Es importante asumir que esta forma de pensar dogmática no es solamente una cuestión religiosa. Siempre y cuando se asuma una visión ética que a priori valore la “pureza” de la acción del individuo por encima de la realidad resultante de esta, existe el peligro de que se desarrollen pensamientos similares, incluso en filosofías seculares. Lo hace el fascismo y su nueva vertiente en los neo-nacionalismos que están surgiendo en todo Occidente. Lo hizo el comunismo estalinista en la ex URSS, también el madurismo en Venezuela, e incluso ciertos liberales institucionalistas que defienden un reduccionismo legalista que evita desarrollar instituciones democráticas funcionales.

El otro extremo, es el de ultra-cientificismo, donde se cometen una serie de errores (científicos) que limitan la acción técnica y política de la sociedad a un conocimiento específico. Estos errores son: 1) el elitismo, que entiende que el científico necesariamente sabe más sobre lo que quiere la gente que las mismas personas. El elitismo tiende a despreciar otras posiciones de manera anti-científica, considerándolas inferiores sin un debido proceso metodológico. 2) el reduccionismo, que reduce la ciencia a una o pocas disciplinas y que ignora el conocimiento de otras disciplinas científicas. 3) ignorar los sesgos propios, dando por objetivo el conocimiento que se tiene sin tomar en cuenta una auto-revisión crítica.

Lo importante es, de manera explícita o implícita, no adjudicarle una característica divina a un conocimiento secular, cayendo en un anti-intelectualismo similar al fundamentalismo religioso. Se trata de evitar convertir el discurso científico o político en un tema ético-dogmático donde se define una sola forma posible de ser.

El peligro se encuentra en que cuando el dogmatismo pasa a ser una forma generalizada de pensar en la sociedad, se convierte en una racionalidad fundamentalista. Esta, destruye la capacidad de la sociedad para enfrentar una serie de problemas de índoles técnicos, a la vez, que políticamente se crea un desbalance de poder, donde los representantes de la creencia fundamentalista, curas, pastores, políticos e incluso algunos científicos en determinadas materias, obtienen el “poder de la verdad”. La audiencia, a quienes estos líderes se dirigen, no puede procesar críticamente lo expresan, porque es considerado una verdad ética indiscutible, y por ende se crea una relación autoritaria, que llevada a la política, debilita o elimina la democracia.

En nuestro país, se nota un renacer del fundamentalismo religioso que amenaza con nuestra capacidad de operar como sociedad. En esta racionalidad, la ética ciudadana se busca enmarcar en una visión purista y reduccionista del buen cristiano. En un Estado en el que hay que enfrentar una política corrupta y autoritaria, esta racionalidad llama a rezar, llenarse de valor para enfrentar lo que venga sea lo que sea y a esperar que milagrosamente los problemas de la sociedad se arreglen.

Es importante aclarar que por “racionalidad cristiana fundamentalista” no se refiere a todos los cristianos. Ni siquiera, al fervor con que cada persona asuma su creencia en Dios. Lo que la hace una racionalidad fundamentalista es remover de la discusión el valor de la acción humana y desvalorar todo lo no divino como algo vacío o incluso “malvado”. Esto se logra creando una emotividad de sometimiento, donde lo que piensa cada individuo es subvalorado y este se debe someter indiscutiblemente a Dios. Pero, como Dios no habla por un alto parlante, este realmente es el sometimiento a una persona o a una organización (que es quien habla por Dios). De tal manera, que lo más importante son las palabras del líder, el pastor, el cura, o, más peligroso aún, el político que convierte su plataforma política en un espacio religioso.

Ocurre aquí una transferencia de lo privado (la relación con Dios o la interpretación de lo que dice el pastor) a lo público. Las personas mueren en República Dominicana por falta de un sistema de salud funcional, y esto es traducido por la racionalidad fundamentalista a “la salud es cuestión de Dios”, él es que la brinda o la quita.

Claro está, no es que las personas piensen de manera tan unidimensional. La mayoría de las personas cuando se enferman van al médico, no a la iglesia. Esto incluye al creyente más ferviente. El problema no radica entonces en como los fundamentalistas asumen su vida. Sino cuando los problemas públicos se enmarcan en una cuestión de fe. Así, por ejemplo, cuando un pastor evangélico tuitea que Dios creó el Covid-19 y quien no acepte la voluntad divina en un fenómeno como este, es igual a ser ateo; o cuando un miembro de la academia de ciencias afirma que una persona se sanó por “la oración colectiva de todo un pueblo”, se relegan a un segundo plano las políticas públicas necesarias para enfrentar la pandemia.

Lo cierto es que la mayoría de los creyentes no asumen su religiosidad de manera personal con un carácter dogmático, pero muchos sí lo hacen en el espacio público y cuando se debaten cuestiones de políticas públicas como la salud sexual y reproductiva o los derechos a la identidad y las libertades sexuales. Al emitirse opiniones sobre este tema, importan menos los derechos de un ciudadano o ciudadana distinta a uno, y lo que importa es qué tanto se está actuando dentro de la “ética dogmática”. De esta manera, una valoración personalmente perfectamente aceptable, se convierte en la ley misma de la sociedad impuesta a todo el mundo sin posibilidad de una discusión profunda y crítica.

Más aún, esto lleva al empoderamiento de políticos corruptos que asumen discursivamente esta ética-dogmática. Lo que se valora desde esta racionalidad no son las decisiones políticas de los líderes del país, sino que profesen su convicción de fe. Por ende, si bien es cierto la mayoría de la población puede tener una serie de demandas políticas concretas, como un mejor sistema de salud, se desarrolla una respuesta nivel racional-emocional, donde las demandas políticas de la ciudadanía pueden ser saciadas si se demuestra una actuación en la “Fe”, con pocos cambios materiales. El desarrollo socioeconómico es reemplazado por uno espiritual, aplicable a toda la ciudadanía sin importar sus demandas específicas.

En todo caso, los Estados aplican políticas públicas para regular lo común, pero si los ciudadanos, o una parte importante de ellos, están más enfocados en examinar la relación del otro con Dios, esas políticas pueden no ser examinadas críticamente. Si la salud la da Dios, es difícil realmente evaluar el sistema de salud. Lo cierto es que diferentes formas de organizar y financiar la sanidad pública conducen a diferentes resultados en la salud de las personas, independientemente de la fe de cada cual.

La racionalidad fundamentalista es, por tanto, antidemocrática en todos los sentidos. Primero porque conduce a renunciar a la influencia ciudadana en las decisiones públicas. Y segundo porque conduce a negar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos que no se adscriban a una visión religiosa concreta, aún sean una minoría numérica.

En respuesta al fundamentalismo, se debe fortalecer el carácter secular de la esfera pública, que no quiere decir anti-religiosidad, sino aceptar que existe una diversidad de pensamientos y creencias y es necesario llegar a acuerdos mínimos para la operación del Estado, sobre la base de un conocimiento verificable y mejorable. Este conocimiento permite un diálogo real, en vez un debate inútil de creencias en conflicto sin una base de fundamentos en común. Si en países como el nuestro, no permitimos el desarrollo de las ciencias estamos cerrando el futuro y poniendo en peligro la calidad de vida de las próximas generaciones.

SOBRE EL AUTOR:

Carlos Morel es Máster en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Actualmente es Director Ejecutivo del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, en Santiago, República Dominicana; donde ha participado en diversas investigaciones relacionadas a cultura política y ciudadanía. Correo electrónico: c.morel@institutoisd.org.

INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO

